SENTENCIA NÚMERO: CUATROCIENTOS DOCE

En la ciudad de Córdoba, a los doce días del mes de octubre de dos mil dieciocho, siendo las doce horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por el señor Vocal doctor Sebastián Cruz López Peña, con asistencia de las señoras Vocales doctoras Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati, a los fines de dictar sentencia en los autos “**R., R. M. p.s.a violación de domicilio, etc. –Recurso de Casación-**” (SAC XXX), con motivo del recurso de casación interpuesto por el Dr. A. O. M., a favor del imputado R. M. R., en contra de la Sentencia número treinta y tres, del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación de esta ciudad.

Abierto el acto por el señor Presidente, se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:

- 1)-. ¿Resulta nula la sentencia por vicios en su fundamentación?
- 2)-. ¿Qué resolución corresponde dictar?

Los señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Doctores Aída Tarditti, Sebastián Cruz López Peña y María Marta Cáceres de Bollati.

A LA PRIMERA CUESTION:

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

I. Por Sentencia n° 33, del 26 de agosto de 2016, dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación de esta ciudad, Tribunal Colegiado, en lo que aquí interesa, resolvió: “*...II) Declarar a R. M. R., de condiciones personales ya relacionadas, autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su accionar en el hecho nominado “tercero” de la Acusación de fs. 288/303 (art. 119, segundo párrafo, del Código Penal), y CONDENARLO a la pena de cuatro años y nueve meses de prisión, con adicionales de ley y costas (arts. 12, 40, 41 y 29 inc.3°, CP; 550 y 551 CPP)...*”(f. 408).

II. El Dr. A. O. M., a favor del imputado R. M. R. interpone recurso de casación en contra de la citada resolución invocando motivo formal y sustancial (art. 468 inc. 2° y 1° CPP) de la referida vía impugnativa, denunciando que el tribunal de mérito por un lado, **ha omitido justipreciar prueba dirimente**(arts. 184, 185 inc. 3, 186, 193 y 194 CPP) y por otro, que **no ha observado**

las reglas de la sana crítica racional, específicamente el principio de razón suficiente. Por ello, insta la nulidad de la resolución (art. 413 inc. 3° CPP; ff. 410/429).

1. Bajo el epígrafe “Digo nulidad de la sentencia impugnada por la no valoración de pruebas de valor dirimente” (arts. 184, 185 inc. 3, 186, 193 y 194 CPP), aduce que la denunciante le mintió al personal policial, que concurrió a su vivienda por un caso de violencia familiar, al manifestarle que el imputado había ingresado a su morada sin su consentimiento. Cuestión que, -recuerda- derivó en una imputación de violación de domicilio en contra de R.. Sin embargo, -enfatisa- el Sr. Fiscal de Cámara instó la absolución por dicho delito durante el debate, en cuanto el hecho no existió.

Resalta que a partir de allí la presunta damnificada inició una serie de mentiras relativas a un ataque sexual por parte de su defendido, cuando en realidad, se trató de una disputa familiar que terminó en una agresión física por parte de R. en perjuicio de ella.

Es por ello que, explica que lo único que pretende discutir es la existencia de los abusos

sexuales, mas no la golpiza que éste le propinó.

Esta última situación, a su parecer, le causó tanta humillación y dolor a la Sra. B. que quiso convertir la afrenta recibida en un desquite al inventar que fue sometida sexualmente.

Así, relata que ella le expresó a A. que iba a formular denuncia en contra del incoado por el delito de lesiones, mas no por abuso sexual. Circunstancia que, -previene- tampoco surge de la orden de detención.

A continuación, esgrime que la testigo O. S. A. d. L., madre de la damnificada, durante la audiencia, sólo mencionó los ataques sexuales que habría padecido su hija luego que el órgano acusador le hiciera un recordatorio acerca de los mismos. De ello infiere, que la víctima miente.

En apoyo a su razonamiento, cita los testimonios de las personas que asistieron a la víctima luego de la paliza que sufrió en manos de su esposo (madre y hermana de ella), quienes indicaron que la Sra. B. nada les dijo sobre un intento de abuso sexual por parte de aquél. Agregando que ésta tampoco ha sido asistida por un equipo de contención psicológica por ese tema.

Aclara que ello no es una simple conjetura de la defensa técnica, toda vez que el incoado ha

sido absuelto por el *iudex* por los hechos nominados primero y segundo que le atribuía la acusación originaria.

Hipotetiza que de excluirse la connotación sexual de la conducta realizada por R., éste hubiera recuperado su libertad.

Seguidamente, se pregunta por qué la supuesta víctima no narró dicho extremo y esperó a ver a su amiga policía (F.) para cambiar la versión.

Cuestiona la credibilidad de los dichos de la testigo M. L. F., por ser amiga de la damnificada. Pone especial énfasis en que no hubo denuncias previas en contra de R. durante los catorce años de matrimonio que compartieron como así tampoco ninguno de los allegados de ella (R. B. S., O. S. A. de L., J. D. D. –hermana, madre e hijo de la damnificada, respectivamente-) dieron cuenta acerca de actos violentos por parte de éste. Luego, reseña dichas declaraciones testimoniales.

Especifica que el hijo de la denunciante expresó que el día del hecho no vio nada fuera de lo habitual entre su madre y la pareja de ésta.

Luego de transcribir la defensa material esgrimida por R., reitera que éste fue absuelto por los delitos de violación de domicilio y abuso sexual gravemente ultrajante. Ello pues, - indica- la presunta víctima no presentaba lesiones (arañazos, hematomas, etc.) que permitieran inferir que opuso resistencia.

Posteriormente, ingresa al análisis del relato de G. B., precisamente en lo atinente al evento en que R. le propinó golpes de puño en su rostro, advirtiendo que cuando ella le dijo al incoado “*yo te quiero, te perdono, voy a volver con vos*”, hacía referencia a continuar con el matrimonio, la convivencia, mas no a un acto de contenido sexual.

Califica de inconsistente la versión de aquella en cuanto expresó que el acusado le había manifestado “*que le pegaba porque ella no lo quería más*”. Ello pues, a su parecer, una persona que está intentado atacar sexualmente a otra no puede hablar de amor.

Alega que la Sra. B. quiso presentar al imputado como un hombre violento, que la maltrataba y la sometía sexualmente, motivada por los problemas de pareja que tenían, específicamente porque pensaba que éste le era infiel.

A los fines de probar lo anterior, menciona que durante el debate le preguntó a ella acerca de la reacción del acusado cuando le manifestó su intención de separarse, respondiendo que éste

simplemente se fue a dormir a la camioneta. Cuestión que, a su criterio, “echa por tierra todas las mentiras y contradicciones vertidas por B. de cómo era R.” –sic-. Es que, no se explica cómo una persona violenta, que maltrata durante catorce años, se pueda retirar ante el simple pedido de su mujer.

Advierte que tampoco se imputó a R. por los actos de violencia económica que narró la damnificada. Por el contrario, arguye que el acusado siempre mantuvo la casa y que ella hace sólo cuatro años que trabaja.

Considera que el tratamiento judicial que se le brinda a los casos de violencia familiar deja a los imputados en un estado de indefensión. Ello pues, a su parecer, se invierte la carga de la prueba, teniendo, entonces, el imputado que demostrar su inocencia. Pese a ello, entiende que en autos, R. ha podido acreditar que no existió el hecho. Ello pues, -explica- el informe médico realizado en la persona de B. corrobora la versión exculpatoria esgrimida por el acusado.

Transcribe el alegato formulado por el Sr. Fiscal de Cámara, que da cuenta de las inconsistencias del relato de la supuesta víctima. De ello, infiere que el órgano acusador debió solicitar la absolución de R. en relación a este hecho.

Cuestiona que el tribunal dictó una sentencia condenatoria cuando, en realidad, a su parecer, debió valorar favorablemente la defensa material del imputado y advertir la imposibilidad fáctica de lo denunciado, más aún –reitera- teniendo en cuenta las pericias médicas obrantes a ff. 37 y 106.

En ese sentido, critica que el *iudex* no citó normas sino que se ha limitado a mencionar jurisprudencia del TSJ, colocando a R. en una posición de tener que demostrar su inocencia en base a acusaciones abstractas y generales.

2. Por otro lado, en el título “**Dice de nulidad de la sentencia por tener motivación ilógica en violación a las reglas de valoración de la prueba**”, cita abundante jurisprudencia atinente al tema.

Seguidamente, expone que “los hechos son controvertidos e irrealizables”, en consecuencia, a su criterio, falsos e inexistentes.

Funda su postura en la pericia médica realizada en la víctima y en la posición exculpatoria esgrimida por R.

Opina que se trató de una denuncia falsa y que no queda duda que los hechos no han existido.

Continúa su análisis señalando que el tribunal ha condenado a R. basándose en su íntima convicción y soslayando el marco legal de la prueba.

En definitiva, solicita la absolución de R. M. R. por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y que se mantenga la condena sólo en relación al delito de lesiones, morigerándose, en consecuencia, la pena en dos años de prisión.

Finaliza su libelo haciendo reserva federal del caso.

III. La cuestión traída a estudio de esta Sala amerita realizar una breve referencia al marco convencional y las consecuencias a nivel legal, la interpretación de la ley y la fundamentación de los fallos, para luego analizar si la sentencia tiene los defectos que le adjudica el recurrente.

1. Marco Convencional y legal

El marco convencional en el que debe situarse a la violencia sexual en contra de la mujer, se encuentra conformado por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Recomendación General n°. 19 del Comité CEDAW y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém Do Pará).

La Recomendación n°. 19 del Comité CEDAW especifica el nexo entre discriminación y violencia contra la mujer, en tanto explicita que el art. 1 de la Convención CEDAW que define la discriminación incluye “la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada” y, a su vez, ésta incluye “actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual...” (Num. 6). La Convención Belem do Pará contiene una regla muy clara que incluye la violencia sexual en la violencia contra la mujer y refiere que entiende por tal a la violencia que “tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual” (art. 2, a).

Este plexo convencional de la máxima jerarquía normativa, ya que la Convención CEDAW tiene rango constitucional (art. 75, 22° CN) y la Convención Belem do Pará es un Tratado

(art. 31CN), ha orientado las reformas de la legislación interna.

A nivel nacional, la Ley 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), a la que adhirió la ley provincial 10352, establece entre los tipos de violencia sexual “cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres”. Asimismo, el art. 2 de la ley 10.400, que modifica el art. 3 la ley 9283, incluye dentro de la violencia familiar “toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psicológica, moral, psicoemocional, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito familiar, aunque esa actitud no configure delito”.

2. Consecuencias del marco convencional y legal

2.a. Interdicción de recurrir a estereotipos de género que conduzcan a validar la vulneración al derecho a una vida libre de violencia

Por todo lo señalado acerca del marco convencional y legal, no hay duda alguna que el abuso sexual es una manifestación de violencia en contra de la mujer en la dimensión convencional y que son punibles las conductas abusivas que se subsumen en las modalidades previstas por el Código Penal, aunque sean realizadas en el matrimonio o cualquier relación de pareja, actual o terminada. La ley nacional 26.485 ha debido decirlo expresamente para remover estereotipos de género. Esta expresión hace referencia a “un grupo estructurado de creencias sobre los atributos personales de mujeres y hombres” y comprende los estereotipos sexuales, entre los que se incluye considerar a las mujeres como propiedad sexual y que “permiten el tratamiento brusco de las esposas para lograr que se sometan a tener relaciones sexuales con sus maridos” (Cook, Rebecca y Cusack, Simone. *Estereotipos de Género-Perspectivas Legales Transnacionales*. Traducción al español por Andrea Parra, Profamilia, 2010, p. 23 y 32).

Identificar y no convalidar desde el Estado los estereotipos que conducen a vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres es una obligación para los signatarios de la Convención

CEDAW, ya que por ella los Estados se encuentran comprometidos a tomar las medidas apropiadas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (art. 5, a). Recientemente la Corte IDH ha señalado que “...el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales” (Corte IDH, caso “Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala”, Sentencia del 24 de agosto de 2017, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, considerando n° 169).

Asimismo, la Corte IDH, puso énfasis en que “los prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. **Los estereotipos “distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos”, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes.** Cuando se utilizan estereotipos en las investigaciones de violencia contra la mujer se afecta el derecho a una vida libre de violencia, más aún en los casos en que estos estereotipos por parte de los operadores jurídicos impiden el desarrollo de investigaciones apropiadas, denegándose, además, el derecho al acceso a la justicia de las mujeres. A su vez, cuando el Estado no desarrolla acciones concretas para erradicarlos, los refuerza e institucionaliza, lo cual genera y reproduce violencia contra la mujer” (Corte IDH, caso “Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala”, cit., considerando n° 173) –el resaltado me pertenece–.

Por ello, en el juzgamiento de los casos las y los jueces deben construir el análisis de los casos desde una perspectiva de género que permite visibilizar los derechos de las víctimas mujeres y evitarles una nueva victimización en la esfera institucional. Dicha perspectiva “en materia de derechos humanos permite, entre otras cosas, visualizar inequidades construidas de manera artificial, socioculturalmente y detectar mejor la especificidad en la protección que precisan quienes sufren desigualdad o discriminación. Ofrece, pues, grandes ventajas y posibilidades para la efectiva tutela de las personas y concretamente, de las mujeres” (Corte IDH, caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, sentencia de 24 de noviembre de 2009, voto razonado concurrente del juez Ad-Hoc, Ramón Cadena Rámila) –citado por esta Sala en autos “Correa”, S. n° 167, 22/05/17-.

La perspectiva de género veda que se estereotipe el rol sexual de la mujer en pareja, negándole discriminatoriamente la calidad de víctima de abuso sexual, por compartir un conjunto errado de creencias que la sitúan como **sometida a obligaciones de tener sexo con su pareja aunque sea en contra de su autonomía**. Una fundamentación basada en estereotipos de género, por ej. haciendo alusiones al “débito conyugal” -que se ha deslizado en el fallo y que no ha sido objeto de recurso por versar en la absolución de uno de los hechos-, siempre que haya sido decisiva en la argumentación, no será legítima e invalidará la sentencia por la interdicción convencional de la discriminación. El uso del término “débito conyugal” en el fallo, pese a que ha sido un término acuñado por nuestra anterior legislación civil, muestra la persistencia y perpetuación de un estereotipo de género que resulta incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y que, si bien en el caso concreto no puede removerse por la prohibición de la *reformatio in peius*, cabe al menos identificarla para prevenir utilidades en otros casos.

En tal sentido, como sostuvo esta Sala en el precedente “Lizarralde” (S. n° 56, 09/03/17), es relevante el rol de los Estados, y en particular de los poderes judiciales, en la problemática relativa a la discriminación en contra de la mujer. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe nominado “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: desarrollo y aplicación”, ha señalado que ***“la administración de justicia es la primera línea de defensa en la protección de los derechos humanos a nivel nacional, incluyendo los***

derechos de las mujeres. Por dicha razón, la ponderación de la CIDH sobre el impacto de los estándares del sistema interamericano o vinculado a asuntos de género comienza con el análisis de sentencias judiciales”. Asimismo, se sostiene que “el rol destacado del Poder Judicial en enviar mensajes sociales avanzando la protección y la garantía de los derechos humanos; en particular las normas encaminadas a proteger a sectores en particular riesgo a sus derechos humanos como las mujeres” (OEA/Ser.L/V/II.143 Doc. 60, 3 de noviembre de 2011, p. 3, el destacado nos pertenece).

2.b. Valoración del contexto y de las pruebas

Como se ha señalado en los precedentes vinculados a otros delitos expresivos de la violencia de género, el análisis del contexto es necesario para la subsunción convencional (TSJ, S. n° 140, 15/04/2016, “Trucco”; “Lizarralde” cit.). Si bien para el abuso sexual este es de por sí expresivo de violencia de género cualquiera sea la relación interpersonal, examinar el contexto presenta una utilidad para interpretar el tipo y evitar errores interpretativos o exigencias probatorias incorrectas en relación a la falta de consentimiento.

El tipo básico del abuso sexual (art. 119 CP) en conformación común para los tipos agravados, pune el abuso “*cuando mediar violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción*”. El contexto será de utilidad cuando en el abuso no se haya utilizado violencia física, que no es indispensable, pero aquel revele que autor y víctima presentan una relación asimétrica, en la que el varón se sitúa como superior que impone el sexo a la mujer a la que sitúa como inferior y, por ello, implica un contacto sexual sin consentimiento por el empleo de abuso de poder.

En cuanto a las pruebas, como ha señalado la Corte IDH “*resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho*” (Corte IDH, caso Fernández Ortega y otros Vs. México, sentencia de 30 de agosto de 2010 en Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, n° 4 , p. 16).

Desde esta perspectiva debe ponderarse el testimonio de la víctima, partiendo de su credibilidad, y verificar si esta presunción no se encuentra contradicha por la prueba, bajo un atento criterio de amplitud probatoria en atención a las circunstancias especiales en las que se desarrolla (TSJ, Sala Penal, “Ferrand”, S. n° 325, 03/11/2011; “Sánchez”, S. 84, 04/05/12; “Agüero”, S. n° 198, 3/8/2012; “Sosa”, S. n° 28, 11/03/2014; “Galíndez”, S. n° 474, 21/10/15; “Funes”, S. n° 398, 12/09/16).

3. Análisis del recurso de casación

Dicho lo anterior, ahora sí corresponde ingresar al análisis del agravio traído por el recurrente, quien ha enfocado la impugnación en la porción fáctica de la sentencia en la prueba que hace a la existencia misma del hecho calificado como **abuso sexual gravemente ultrajante** (hecho nominado tercero). Es decir, cuestiona que R. M. R. haya abusado de G. A. B..

3.a. Atento el agravio que trae el recurrente cabe señalar que la obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al tribunal de mérito –entre otros recaudos– *tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio* (De la Rúa, Fernando, *La casación penal*, Depalma, 1994, p. 140; TSJ, Sala Penal, S. n° 44, 8/06/00, “Terreno”, entre muchos otros), y efectuar dicha ponderación *conforme la sana crítica racional* (art. 193 C.P.P.), en consecuencia, el recurso que invoca la infracción a las reglas que la integran –lógica, psicología, experiencia– debe también contraponer un análisis de todo el cuadro convictivo meritado, y en función de éste, a su vez, evidenciar la decisividad del vicio que se denuncia (art. 413 inc. 4°, CPP). De allí que resulte inconducente una argumentación impugnativa que se contente sólo con reproches aislados que no atiendan al completo marco probatorio o que esgrima un defecto carente de trascendencia en una apreciación integrada de aquél. En tales supuestos, al no efectuar un abordaje que agote las distintas premisas que sostienen la conclusión que causa agravio, la crítica no alcanza a enervarla y la decisión transita incólume el control casatorio (TSJ, Sala Penal, “Martinez”, S. n° 36, 14/03/2008; “Fernández”, S. n° 2813, 15/08/2008; “Crivelli”, S. n° 284, 17/10/2008; “Brizuela”, S. n° 89, 23/04/2009; “Galindez”, S. n° 474, 21/10/15, entre otras).

3.b. Es frecuente en este tipo de delitos que atentan contra la integridad sexual que los

elementos de juicio que corroboran el relato de la víctima constituyan, en su mayoría, prueba indirecta. Ello, como se ha advertido en numerosos precedentes, no resulta óbice para sostener una conclusión condenatoria, en la medida en que los indicios meritados sean unívocos y no anfibológicos (TSJ, Sala Penal, “Ramírez”, S. n° 41, 27/12/84; “Astudillo”, S. n° 248, 28/07/14”; “Galindez”, cit.) y a su vez sean valorados en conjunto y no en forma separada o fragmentaria (TSJ, S. n° 45, 29/7/98, “Simoncelli”; “Bona”, cit.; A. n° 1, 2/2/04, “Torres”; S. n° 49, 01/06/06, “Risso Patrón”, “Astudillo” cit. entre muchos otros). Es indispensable la ineludible valoración integrada de la prueba indiciaria.

En similar sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la cual *“cuando se trata de una prueba de presunciones... es presupuesto de ella que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes”* (“Martínez, Saturnino”; 7/6/88, Fallos 311:948; cfr. T.S.J., Sala Penal, S. n° 45, 28/7/98, “Simoncelli”; A. 32, 24/2/99, “Vissani”); *“la confrontación crítica de todos los indicios resulta inexcusable para poder descartarlos, por lo que el argumento de la supuesta ambivalencia individual de cada uno de ellos constituye un fundamento sólo aparente que convierte en arbitraria a la sentencia portadora de este vicio”* (CSJN, “Fiscal c/ Huerta Araya”, 12/6/90, citado por Caubet, Amanda y Fernández Madrid, J., “La Constitución, su jurisprudencia y los tratados concordados”, Errepar, 1995, n° 4840). Así fue que tal tesis llevó al Alto Tribunal a dejar sin efecto *“la sentencia que absolvió al procesado desconociendo un cuerpo de pruebas e indicios precisos y concordantes que no permitían dudar sobre la existencia del hecho ilícito y la responsabilidad del autor del delito”* (“Lavia”, 12/5/92, citado por Caubet y otro, ob.cit., n° 4390; TSJ, Sala Penal, “Bona”, cit.).

Así entonces, en la medida en que resulta inherente a la esencia de la prueba indiciaria la consideración conjunta de las distintas premisas que la integran, la fundamentación que prescinde de tal lectura global -única que confiere sentido convictivo a los indicios- configura una motivación omisiva que nulifica la decisión en ella sustentada (TSJ, Sala Penal, S. n° 112, 13/10/05, “Brizuela”; “Risso Patrón” cit.; “Galindez”, cit.).

3.c. En cuanto al contexto, además de reiterar que en la violencia sexual la utilidad se encuentra acotada a permitir fundamentar la exigencia típica de la falta de consentimiento, el argumento defensivo relativo a que no se ha acreditado dicho contexto en cuanto no hay denuncias previas ni testimonios de allegados de la víctima que den cuenta de ese escenario violento no es de recibo.

En efecto, de las probanzas valoradas por el juzgador para arribar a esa decisión (f. 402) emergen indicios del contexto, tales como la personalidad del acusado, que según la pericia psicológica y psiquiátrica, permite vislumbrar un riesgo elevado de llegar a actuar con comportamientos violentos (ff. 400/401), las “huellas mentales en la víctima”, precisamente signos evidentes y recurrentes de angustia y sentimientos de temor en torno a la situación de violencia que habría estado atravesando (f. 401/vta.) y el pronóstico social de riesgo mencionado por el informe de la asistente social (f. 401 vta.), que fortalecen el valor convictivo del testimonio de la víctima y los rastros que ha dejado la ofensa sexual y que se analizarán en el punto siguiente.

Ante ese contexto de violencia, deviene **intrascendente** que el imputado R. no haya ejercido violencia en el momento en que tomó conocimiento de la voluntad de la mujer de terminar con la relación sentimental que los unía, sino que haya escalado en el nivel de la misma a medida que ella rechazaba sus intentos de retomar el vínculo (ver informe socio ambiental de f. 271/273 y pericia psiquiátrica de f. 259/261).

En tal sentido, resulta prudente recordar que esta Sala ha señalado que una de las particularidades de este tipo de violencia de género y familiar es el tiempo de victimización, porque a diferencia de otros delitos “aquí la víctima sufre reiterados comportamientos agresivos, una escalada de violencia cada día o semana más agravada y de mayor riesgo”, caracterizada por su duración, multiplicidad y aumento de gravedad (TSJ, S. n° 126, 24/05/2013, “García”; S. n° 140, 15/04/16, “Trucco”; S. n° 311, 27/07/16, “Acosta”). Asimismo, debe prestarse especial atención a que no se cuenta con testimonios que brinden detalles acerca de la dinámica familiar pues los protagonistas eran muy reservados (ver testimonio de R. B. S. a f. 370 vta. y O. S. A. de L. a f. 371), “se trataba de un matrimonio muy cerrado, con poco contacto vecinal, que no conversaban mucho con otros vecinos y que ninguno de ellos tenía conocimiento de cómo era la dinámica familiar” (declaración

testimonial de L. A. B. a f. 92 incorporado al debate a f. 353 vta.).

Por consiguiente, es dable concluir que los aspectos omitidos por el recurrente de la resolución en crisis (f. 395), denotan la existencia de una situación de violencia de género que activó el principio de amplia libertad probatoria.

3.d. Surge evidente que el impugnante ha dejado de lado, por así decirlo, el contexto de violencia en que se hallaba inmersa la víctima, prescindencia sobre la cual edifica sus agravios en torno a la falta de credibilidad del relato y a la insuficiencia de las pruebas ponderadas para fundar la conclusión asertiva.

Es así que, surge palmario que las críticas del defensor se sustentan en un análisis fragmentario del cuadro convictivo y no objeciones realizadas al conjunto.

En efecto, el impetrante soslaya que el tribunal para arribar a su solución, esto es la **existencia del hecho de abuso sexual gravemente ultrajante**, ponderó de modo global un cúmulo de elementos a saber (ff. 393/403 vta.):

***Testimonio de la víctima**, quien durante el debate (f. 350), en prieta síntesis, expresó que al tiempo de los hechos estaba separada de hecho con el acusado, no convivían. Aclaró que ella quería que su marido siguiera teniendo relación con el hijo de ambos y que la ruptura de la relación de pareja fuera lo menos traumática posible para éste último. Por ello, relata, acordaron que el imputado podía visitar al niño cuando ella no se encontrara en la vivienda. Sin embargo, mencionó que este no respetaba lo pactado y se quedaba, pese a que ella se hallaba allí.

Narró un episodio previo a la separación en que el acusado le pegó una cachetada ante un reclamo de dinero.

Asimismo, comentó que éste le profería amenazas tales como *“no voy a dejar que me dejes nunca”*, *“que nunca la iba a dejar en paz... que nunca iba a lograr dejarlo... que siempre iba a ser su mujer... y que si se iba de su lado, prefería que los dos estén muertos”*, que iba a matarla y luego él se quitaría la vida.

También refirió que R. la seguía a la parada del colectivo a la distancia.

En relación al evento aquí ventilado, recordó que ella regresó a su morada luego de un almuerzo con su progenitora. Oportunidad, en que observó al imputado tomando mates junto

a su hijo mayor. Ante ello -indicó- le recriminó su presencia y éste se disculpó. Seguidamente, él le manifestó “ya me voy” y procedió a salir de la casa junto a N.R. y su descendiente más grande, quien se iba a jugar a la pelota.

A continuación -mencionó- ella ingresó al baño para tomar una ducha y al salir de allí se percató que el incoado había regresado. Ante ello, expresó que ella se dirigió a su dormitorio a los fines de cambiarse, aclarando que alcanzó a colocarse una polera y una bombacha. Inmediatamente -narró que- éste se dirigió a la habitación donde ella se hallaba y le manifestó “*yo no me voy a ir, vos sos mi mujer, vas a ser mía*”, haciendo alusión que tendrían relaciones sexuales.

Relató que ella le dijo “*ándate, vos no me tocás y yo te voy a denunciar*”, pero que a él no le importó, pues se sacó el pantalón y el calzoncillo, la arrojó sobre la cama y se tiró encima de ella. Luego, indicó que éste **le rompió la bombacha, le sujetó los brazos con sus rodillas** mientras trataba de sacarle la polera. Sin embargo -refirió- éste sólo logró subírsela. Oportunidad, en que -rememoró- el acusado **aprovechó para succionarle sus pechos en forma agresiva e introducirle sus dedos dentro de su vagina.**

Declaró que ella le pedía que la soltara y hacía fuerza para lograr zafar. Agregando que la resistencia que oponía desataba una reacción más violenta por parte de R..

Aludió que éste estimulaba su miembro viril para intentar una erección, específicamente tocándose y frotando sus genitales en su vagina. Sin embargo -señaló- que éste no logró la erección y comenzó a golpearla a la vez que le manifestaba “*mirá lo que me haces hacer, vos no me querés más*”.

Especificó que le pegó reiteradamente con el puño cerrado en el rostro, los brazos y en el pecho. Dicho accionar, -contó- le ocasionó un profuso sangrado en la nariz, que le impedía respirar.

Dio cuenta que al encontrarse ya sometida y sin posibilidad de defenderse, en un intento que R. desistiera su accionar, le manifestó “*yo te quiero, te perdono voy a volver con vos*”. Posteriormente, éste dejó de golpearla. Aunque aclaró que no sabe si fue por lo que le dijo o porque la vio ensangrentada.

Seguidamente, testificó que el imputado la arrastró por el piso, le dio una toalla y le dijo “*me*

voy a matar”, dirigiéndose a la cocina. De allí, -apuntó- escuchó el ruido de cubiertos, por lo que pensó que iba a volver a asesinarla. Pese ello, indicó que no le salió ni siquiera correr, que se quedó ahí (paralizada).

Expuso que, el acusado regresó, pero, sin nada en las manos. A continuación, indicó que le pidió por favor que la ayude, enfatizando que se ahogaba con la sangre, que no podía respirar porque le había roto el tabique.

Recordó que R. le dijo que ante terceros expresara que se había caído en el baño.

A continuación, éste fue en búsqueda de su hermana. Una vez aquella en el lugar, -narró- tomó coraje y le manifestó que el acusado le había pegado.

Además, mencionó también llegó su madre y la trasladaron a la guardia del hospital, donde estuvo tres días internada (ff. 365/370 vta. y 395/396);

***La declaración testimonial de R. B. S.** (ver acta de debate de f. 350 vta.), que da cuenta que el día del hecho, ella se dirigía a la iglesia y fue interceptada por el imputado, quien le requirió que fuera al domicilio de su hermana. Una vez allí, destacó que observó a G. llorando, con una toalla en la cara y al preguntarle que le pasaba ésta le respondió que el acusado le había pegado. Añadió que éste le decía que no había querido hacerlo (ff. 370 vta./371);

***La testigo O. S. A. d. L.**, madre de la víctima, expresó durante la audiencia (f. 351), que el imputado fue a buscarla a la iglesia y le solicitó que fuera a la casa de su hija, pues le había pegado. Ante ello -rememoró- se dirigió a dicho lugar. Oportunidad en que encontró a su descendiente G. llorando en un sillón. Luego -narró- aquella le manifestó que R. le había pegado en el rostro, que estaba loco.

También expresó que la llevó al hospital junto a una amiga de ésta, de nombre L.

Contó que si bien su hija era muy reservada, finalmente, al llegar al hospital, ella le confió la traumática situación que había vivenciado momentos antes con el acusado, precisamente que ***“ingresó R. a su habitación, que la arrojó a la cama, que le apretó un brazo con una rodilla para que no pudiera moverse, que le rasgó la ropa interior y que intentó mantener relaciones sexuales en forma forzada”***(f. 371/372 y 396);

***Declaración testimonial de M. L. F.** (f. 352 vta.), quien durante el debate señaló que es amiga del imputado y de la denunciante, que los quiere a ambos, sin embargo se siente más

cercana a ésta última por ser mujer.

Declaró que aquellos estaban separados de hecho y que G. B. había decidido no continuar con la relación.

Con respecto al evento investigado, manifestó que la víctima la había llamado por teléfono y de modo desesperado le dijo “*M. me desfiguró*”. Ante ello -indicó- se dirigió junto a su marido al domicilio de aquella. Cuando llegó, expresó que **visualizó a su amiga con una toalla en su cara ensangrentada**. Agregó que en el lugar también estaba la madre y hermana de B.

Rememoró que había tratado de tranquilizar a G. y que al preguntarle sobre lo que había pasado, aquella **no podía hilar la conversación, estaba en shock**.

Detalló que acompañó a la damnificada al baño para que se lavara la cara. Oportunidad en que le vio el ojo morado. En ese contexto -añadió- aquella le manifestó “**discutimos, me golpeó, me forzó, me rompió la ropa interior**”.

Testificó que cuando concurrieron al hospital, la víctima le brindó más detalles del evento criminoso, específicamente que “*la tiró en la cama, la sostuvo con la pierna y la forzó para tener relaciones, le rompió la ropa interior, que lo veía desencajado y él sólo paró cuando vio la sangre*”.

Enfatizó en que G. le había señalado que tuvo terror que él la matara, específicamente cuando R. se fue a la cocina a buscar un cuchillo.

Asimismo, subrayó que **el día del hecho observó la ropa interior de G. A. B. tirada en el piso, al frente de la cama. Agregando que la misma estaba desarreglada**. En relación al estado anímico de la víctima, precisó que aquella tenía terror de lo que le pudiera pasar, ue tenía miedo de que R. apareciera, aún en el hospital. Situación que, explica, no era razonable, pues él ya estaba detenido.

Previamente, durante la instrucción, describió a su amiga con “*un estado de nerviosismo y que al retirarse la toalla del rostro notó que tenía el labio superior cortado, la nariz desviada e hinchada, el ojo izquierdo hinchado y le salía sangre de la zona, también observó que tenía un moretón en el brazo izquierdo y en el derecho un corte*” (ff. 31/32 incorporado al debate a f. 352 vta.) -ff. 374/376 vta. y 396-;

***Certificados médicos de la damnificada** (ff.5 y 37 incorporado al debate a f. 353) que deja constancia que aquella presentaba **escoriación de 2x2 cm en codo derecho**, hematoma bpalpebral en ojo izquierdo, edema inflamación en labio superior. Además, refiere un diagnóstico de traumatismo facial, presentando “*al examen físico hematoma y equimosis palpebral izquierdo y leve en párpado inferior derecho, hematoma en cara externa de brazo izquierdo y hematoma una escoriación en codo derecho...*” (ff. 381 vta. /382 y 398);

***Informe técnico médico de la víctima** (f. 59 incorporado al debate a f. 353) que constató: “*1) equimosis traumática de 2x1 cm en mucosa de labio superior; 2) equimosis traumática con edema traumático color negro – violáceo de 5 x 5 cm que abarca parpado superior, parpado inferior y zona periférica del ojo; 3) equimosis traumática de 2x1 cm en dorso de mano derecha; 4) excoriación traumática de 0,5 cm del codo derecho; 5) equimosis traumática de 2 x 3 cm en cara externa de brazo izquierdo*”. Además, indicó que la Sra. B. brindó la misma versión de los acontecimientos que habría padecido por parte del acusado (ff. 382 vta. y 398 vta.);

*Las lesiones descritas precedentemente se corresponden a las mencionadas en el informe de la Sección Clínicas y Hospitales de la Policía Científica (f. 106 incorporada al debate a f. 353 vta.) –f. 382 vta.-;

***Acta de secuestro** (f. 233 incorporada al debate a f. 353 vta.) de una **bombacha** blanca con flores en rojo y verde que estaba en el piso, entre la mesa de luz y el ropero (ff. 382 y 399). De la inmediación del debate, el *iudex* constató que la misma “*presentaba varias roturas*”. Desgarros que, estimó compatibles con los tirones violentos mencionados por la damnificada (f. 399 vta.);

*Además, el tribunal justipreció que la víctima le confió en términos similares la traumática situación que había vivenciado a distintos interlocutores, a saber: su madre, a su amiga F., a L. V. C. (ff. 372/373), D. A. A. (ff. 378/379) y Franco J. M. (ff. 379 vta.) –ff. 396/398-;

***La pericia psicológica practicada en la damnificada** (ff. 312/313 incorporado al debate a f. 353 vta.) señaló que **no se detectaron indicadores clínicos compatibles con fabulación o mitomanía**. Por otra parte, en relación a la sintomatología relacionada con los hechos que se

investiga constató “*signos evidentes y recurrentes de angustia y sentimientos de temor en torno a la situación de violencia que habría estado atravesando y sobre todo respecto a la posibilidad de que su ex pareja pudiera salir en libertad*”. Luego, concluyó que “*a partir de los indicadores anímico-emocionales y cognitivos evidenciados (angustia, tensión psíquica y temores, dificultad para concentrarse, etc.) se infiere que **la entrevistada presenta signos compatibles con depresión leve reactiva a situación traumática** (posiblemente asociada a las situaciones de malos tratos psicofísicos que habría experimentado). Ello constituye a su vez un daño psíquico que por el momento se infiere como de tipo leve, con posibilidad de agravamiento...*” (ff. 386/387, 398 y 401);

*La **pericia psicológica del imputado** (ff. 206/209 incorporado al debate a f.353 vta.), donde se infirió una personalidad de características ansiosa-dependiente cuyos conflictos dramáticos emotivos lo tornan disfuncional en la relación interpersonal de pareja amorosa. Además, mencionó que su conformación psíquica actual resulta compatible con un individuo que aprendió modos hostiles de resolución de conflictos, advirtiendo que detrás de un frente de decoro y restricción, aparece “*el enfado intenso y sentimientos opositoristas que ocasionalmente emergen cuando fallan sus controles de frenos inhibitorios ante la baja tolerancia a las frustraciones devenida de la vivencia de su pérdida de contención afectiva amorosa.*”. Finalmente, concluyó que hay **riesgo elevado** por parte del acusado **de llegar a actuar con comportamientos violentos**. Ello pues, a su criterio, no se encuentran presentes los suficientes factores inhibitorios esperables en la reinserción social (ff. 384 vta./386 y 400);

*La **pericia psiquiátrica del acusado** (ff. 259/261 incorporado al debate a f. 353 vta.), que advirtió dificultades por parte de éste en la resolución de conflictos conyugales de una manera adaptativa en un contexto de violencia familiar como así también dificultades para elaborar la disolución del vínculo. Asimismo, puso énfasis en que surgían **indicadores de riesgo** por la dependencia afectiva y el compromiso emocional aun presentes. Por último, calificó la situación como “*de riesgo alto en cuanto a la posibilidad de repetición de hechos como los que se investigan...*” (ff. 387 vta. y 400 vta./401);

*El **informe Socio Ambiental** (ff. 271/273 incorporado por su lectura al debate a f. 353 vta.) que señaló que el imputado no habría aceptado la separación conyugal y habría intentado

retomar la relación en numerosas ocasiones, no obstante la negativa de la Sra. B.. Oportunidades en que -explicitó- el acusado se habría tornado violento, precisamente agrediendo, verbal, sexual y físicamente a la víctima. Enfatizó que *“la negación para admitir la separación conyugal, los celos, las amenazas, y las lesiones físicas acreditadas en autos darían cuenta de violencia familiar propiamente dicha, con riesgo de reiteración en caso de no someterse las partes a terapia, a los fines de modificar la situación...”* (ff.383/384 vta. y 401 vta./402);

*La posición exculpatoria del acusado no resulta compatible con las constancias de la causa (f. 402).

3.e. Entonces, es posible afirmar que el suceso ocurrido en la vivienda de la damnificada fue un **ataque sexual**, porque así ella lo relató con enorme precisión y con absoluta coincidencia en las distintas etapas del proceso.

Sin perjuicio de ello, es dable destacar que la condena de R. no reposa en una única fuente de prueba -testimonio de la denunciante- sino que se sustenta en múltiples fundamentos probatorios ponderados de manera integrada al conjunto del material convictivo posibilitando arribar lógica y legalmente al resultado que se rechaza por ser perjudicial al imputado. A saber: vestigios físicos tanto en el cuerpo como en las vestimentas de la damnificada (ver certificados e informes médicos reseñados y acta de secuestro de la ropa interior), las secuelas psicológicas y su estado anímico (que da cuentas la pericia psicológica de la damnificada y los testigos que arribaron al lugar del hecho inmediatamente después -R. B. S., O. S. A. d. L. y M. L. F.-, quien la describieron llorando y en estado de shock), cambios conductuales en la víctima (tenía terror que el imputado se hiciera presente, incluso aún cuando estaba detenido, ver testimonio de F.) y la personalidad del acusado (según pericia psicológica y psiquiátrica de éste).

Ahora bien, el esfuerzo del defensor dirigido a plantear la posibilidad de una hipótesis delictiva distinta (v.gr. el acusado lesionó a la damnificada y ésta en aras de venganza pergeñó un relato de sometimiento sexual), omite que ello fue expresamente desechado por el tribunal de mérito de manera contundente por no resultar compatible con las constancias de la causa (f. 394 vta.).

Es así que, el *iudex* puso especial énfasis en que si bien, R. al momento de esgrimir su posición exculpatoria arguyó que le habría propinado dos golpes a quien era su pareja, con el revés de su mano y negó todo acto con connotación sexual (ff. 361/364 vta.), las lesiones descritas en el informe médico realizado en la persona de la víctima permitían concluir que se trató un mayor número de golpes, de gran intensidad y en otras zonas de su cuerpo (manos, brazos y codo) –f. 394 vta.-.

Asimismo, destacó que las características del evento inequívocamente abusivo que narró la Sra. B. con enorme precisión y con absoluta coincidencia en lo que hace a los elementos esenciales en todas sus exposiciones (ff. 395/398), encontraron correlato en los rastros físicos y de las vestimentas de aquella (ff. 398/399 vta.). A ello se suma el dictamen pericial que da cuenta del crédito que merece la damnificada, esto es que ***“no fueron evidenciados al momento de la presente intervención indicadores clínicos compatibles con fabulación o mitomanía”*** (f. 395).

Sin perjuicio de ello, a los fines de satisfacer las expectativas defensivas del imputado, estimo atinado efectuar las consideraciones que a continuación se consignan.

En primer lugar, corresponde señalar que si bien la defensa del imputado R. insiste que el informe médico realizado en la damnificada corrobora la versión exculpatoria esgrimida por aquél, el análisis de dicha prueba, permite advertir lo contrario. Es que, tal como sostuvo la Cámara (f. 394 vta.) y se ha reseñado *supra*, las entidad y cantidad de equimosis y hematomas que reflejaba la denunciante en su cuerpo, echa por tierra la aseveración relativa a que le pegó dos golpes con el reverso de la mano. Además, no puede pasar por inadvertido que la Sra. B. presentaba hematoma en cara externa de brazo izquierdo y hematoma con excoriación en codo derecho (f. 382 vta.); circunstancia que se condice con lo narrado por ella, esto es que R. se tiró sobre ella y *“le sostuvo los brazos con la rodilla”* (f. 365 vta.).

Por otro lado, en relación al argumento defensivo relativo a que la víctima no mencionó el acometimiento sexual perpetrado por R. a quienes fueron inmediatamente a auxiliarla, es dable mencionar que no resulta razonable exigir que una persona que, luego de ser brutalmente atacada y encontrándose impedida de poder respirar por la cantidad de sangre que le salía de la nariz (ver testimonio de B. a f. 365 vta.), deba repararse en indicar detalles del

suceso.

Téngase en consideración, que en ese cuadro de situación, el acusado todavía se encontraba en el lugar cuando arribaron R. B. S. y O. S. A. d. L., logrando la damnificada dar algunos datos de lo acontecido cuando vislumbró la posibilidad de que éste la trasladara al hospital - con el temor que significaba para ella quedarse nuevamente a solas con él, tal como declaró F. a f. 375-. Así, la primera declaró que su colateral le había manifestado que “*M. le había pegado*”, “*que no quería ir con M. al médico*” (f. 370 vta.).

En el análisis de dicha cuestión, debe prestarse especial atención a que F. describió a la denunciante en un estado de shock, que no podía hilar la conversación (ver f. 374 vta.).

Fue así, entonces, que la víctima, ya encontrándose en el nosocomio, recibiendo atención médica, les confió a distintos interlocutores los detalles de lo que había vivenciado en manos de quien había sido su pareja por más de trece años (ver testimonios de A. d. L. a f. 371 vta., C. a f. 372 vta., F. a f. 374 vta., A. a f. 378 vta. y M. a f. 379).

4. Conclusión

Por todo lo expuesto, es posible concluir que R. M. R. mediante violencia física abusó sexualmente de G. A. B.

En definitiva, los aislados ataques del recurrente, no logran conmover la contundencia de la derivación efectuada de la *totalidad* de la prueba, no advirtiéndose vicio nulificante alguno en la fundamentación llevada a cabo por el tribunal sobre la existencia de los hechos.

Voto, pues, negativamente.

El señor Vocal doctor Sebastián Cruz López Peña, dijo:

La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora M. Marta Cáceres de Bollati, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN:

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

Como resultado del acuerdo precedente, corresponde rechazar el recurso de casación

interpuesto por el Dr. A. O. M. en su carácter de defensor del imputado R. M. R.. Con costas (arts. 550 y 551 CPP).

Así, voto.

El señor Vocal doctor Sebastián Cruz López Peña, dijo:

La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal;

RESUELVE:

Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Dr. A. O. M. en su carácter de defensor del imputado R. M. R.. Con costas (arts. 550 y 551 CPP).

Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por el señor Presidente en la Sala de Audiencias, firman éste y las señoras Vocales de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.

LOPEZ PEÑA, Sebastián Cruz

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA

TARDITTI, Aida Lucia Teresa
VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA

CACERES de BOLLATI, M. Marta
VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA

SOSA LANZA CASTELLI, Luis
M. SECRETARIO/A GENERAL
DEL T.S.J